	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN FORMA DIRECTA DISTINTOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (Convenios de Asociación con Entidades sin Ánimo de Lucro)	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2025-

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO		
1.Datos del área querequiere el contrato:	**Secretaría solicitante:**	Secretaría del Interior/ Departamento del Atlántico
	Dependencia de la Secretaría solicitante:	Secretaría Del Interior
	Nombre del servidor que diligencia el insumo	JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA
2. Nº de proceso en el plan de compras:	80111600;80111623: Apoyo a la gestión en la articulación con la defensoría del pueblo y oficina para el fortalecimiento de los procesos de derechos humanos. 80111600; 93131503; 93131501; 93131502, 80111623: Servicios profesionales y/o desarrollo de actividades en el marco de la garantía de los derechos de los grupos religiosos en el departamento del Atlántico. 80111600; 93131503; 93131501; 93131502, 80111623: Servicios profesionales y/o desarrollo de actividades en el marco de la garantía de los derechos de la población con discapacidad en el departamento del Atlántico. 80111600; 93131503; 93131501; 93131502, 80111623, 49101700: Servicios profesionales y/o desarrollo de actividades en el marco de la garantía de los derechos de la población de veteranos en el departamento del Atlántico.	
3. Código BPin	2024002080047 – 2024002080051 - 2024002080081 - 2024002080109	
3.1 Clasificación Central de Productos (CPC)- DANE	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p	
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER		
1.1 Descripción y justificación:	**ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES:** La Constitución Política de Colombia en su artículo 2º consagra que: *"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.* *Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.*" La Constitución Política de Colombia del año 1991, como norma rectora de los deberes y derechos, declara que en su Artículo 303. "En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del Departamento; el gobernador será agente del presidente de la república para el mantenimiento del orden público, determinando de manera clara la responsabilidad de los gobernadores en el "manejo del orden público" en sus respectivos departamentos, así como a los alcaldes en sus respectivos municipios, lo que incluye, desde luego, la seguridad de los ciudadanos frente a cualquier hecho que pueda afectar su vida, integridad, bienes y honra". ARTICULO 305º—Son atribuciones del gobernador: 1-Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales. 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. (…)	

FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

Los departamentos cumplen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución Política y las leyes. Al respecto, el artículo 298 de la Constitución Política dispone: *"Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.*

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios quedeterminen la Constitución y las leyes.

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga."

La Ley 2200 de 2022, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos, en su artículo 2o define a los departamentos en los siguientes términos: *"Los departamentos forman parte de la organización territorial del Estado y como entidad territorial tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales, la planificación, promoción, coordinación del desarrollo económico, ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de complementariedad de la acción municipal y enlace de las actividades y servicios que prestan los municipios y la Nación. (...)"*

Respecto a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, estos fueron definidos por el legislador as (art. 3 de la Ley 2200 de 2022):

"(...) Coordinación. Exige a los departamentos que sus actuaciones se efectúen mediante una ordenación sistemática, coherente, eficiente, armónica, técnica, concertada y conducente, con las competencias concurrentes de otras autoridades del nivel nacional, entidades territoriales de igual o menor nivel y los esquemas asociativos territoriales.

Concurrencia. Exige a los departamentos que, en materias comunes sobre un mismo asunto o asuntos determinados por la Constitución o la ley, converjan y participen en conjunto con autoridades del nivel nacional o territorial, según corresponda.

Complementariedad. Es el mandato de mejorar el cumplimiento de las competencias exclusivas de las entidades territoriales de nivel inferior cuando estas carezcan de la capacidad suficiente para cumplirlas en términos administrativos, técnicos o presupuestales.

Subsidiariedad. Exige a los departamentos asumir o apoyar de manera transitoria y parcial, según el caso, de manera idónea y eficaz, las competencias y funciones de distritos y municipios de su jurisdicción, cuando bajo criterios de indicadores objetivos carecen de capacidad administrativa, institucional o presupuestal para ejercerlas adecuadamente, respetando el principio de autonomía en materias cuya competencia sea exclusiva de dichos entes territoriales. (...)

Sobre los anteriores principios, la Corte Constitucional en sentencia C-138 de 2020, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, señaló:

"(...) subsidiariedad, porque la coordinación departamental no puede desconocer que, en principio, el nivel más idóneo para el ejercicio de las competencias es el municipio, entendido este como el más próximo a las necesidades de la comunidad, sin negar que, según el caso, el nivel más idóneo puede ser el departamental; concurrencia, porque el ejercicio autónomo de las funciones de las distintas entidades territoriales no significa la exclusión de las atribuciones de otros

niveles u otras autoridades, sino su participación conjunta dentro del marco de sus propias competencias y desde sus propios roles; y, por supuesto, coordinación, entendida como la consecuencia necesaria de la concurrencia de distintas autoridades en una misma materia y el instrumento más idóneo para la adecuada articulación de las diversas funciones concurrentes, sin vulnerar o irrespetar la autonomía de cada entidad territorial, para el ejercicio de sus propias atribuciones (...)".

Los anteriores principios no sólo guían la labor del legislador en la configuración de la organización territorial, sino que constituyen una guía para el ejercicio concreto de las funciones de los distintos niveles de la estructura territorial, para atender las necesidades de la colectividad en atención a los fines esenciales del Estado, según la postura inamovible del artículo 2° de la norma superior.

Las mencionadas funciones se ejecutan por parte de los departamentos en los términos que disponga la Constitución Política y la ley; en el marco de lo dispuesto, a su vez, por los planes y programas de desarrollo económico y social, tanto nacionales como departamentales.

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

En lo referente a las competencias de los departamentos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, la Ley 2200 de 2022, "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos", establece:

"ARTÍCULO 4o. COMPETENCIAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:
(...)
2. Bajo esquemas de coordinación, concurrencia y complementariedad en:

2.3 En materia de orden público, los departamentos en cabeza de sus Gobernadores como agentes del presidente de la República deben preservar la seguridad y la convivencia en el área de su jurisdicción y responder por las relaciones y mecanismos de coordinación entre las distintas instancias encargadas del manejo del orden público, procurando una labor unificada y eficaz.

Los Consejos de Seguridad departamentales, elaborarán políticas y planes específicos de seguridad, para afrontar conforme a sus particularidades y especificidades, los conflictos y factores de perturbación del orden público y la convivencia, adoptando las medidas pertinentes con respeto a los derechos humanos, la convivencia ciudadana y la solución pacífica de controversias y conflictos. Además, cumplirán con las instrucciones que el Gobierno nacional imparta en materia del uso de la fuerza pública, ejecución de políticas de seguridad que se adopten y de medidas para la tranquilidad pública."

AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR

El Secretario del Interior Departamental se encuentra debidamente facultado para celebrar contratos y convenios conforme lo establece el Decreto Departamental 000391 de 2024, el cual modifico parcialmente el Decreto Departamental 000021 de 2020.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR

El Departamento del Atlántico por medio de la Secretaría del Interior, tiene como propósito principal planear, gestionar, y desarrollar programas, proyectos, y actividades en materia de seguridad, orden público, participación comunitaria, convivencia, derechos humanos, prevención y atención de desastres, todo dirigido hacia la comunidad atlanticense. En ese sentido y teniendo en cuenta que la convivencia ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales de la política integral de defensa y seguridad para la prosperidad del Departamento del Atlántico, así como también la convivencia comprende la promoción de apego y adhesión de los ciudadanos a una cultura basada en el respeto, las normas y las leyes de convivencia; la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos de respeto por los derechos de los demás; la resolución política de conflictos, tolerancia y construcción de valores; la Administración Departamental debe diseñar planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, basados en el fortalecimiento de barreras sociales y culturales frente a la transgresión de la ley, el apoyo a la convivencia pacífica, la solución acertada de conflictos, buscando garantizar la vida e integridad de las personas, reduciendo los niveles de violencia, intolerancia e inseguridad, sin descuidar las acciones coercitivas frente al delito y la violencia común.

Los objetivos institucionales de esta dependencia son:

- Formular políticas, planes y proyectos para el desarrollo comunitario del Departamento del Atlántico.
- Prestar asistencia jurídica y legal a la comunidad para su participación en la gestión Pública.
- Planificar y articular programas sociales.
- Promover la paz en el Departamento del Atlántico.
- Intervenir en la solución de conflictos.
- Planificar, dirigir y coordinar programas de seguridad en el Departamento del Atlántico.
- Coordinar la actualización del censo de población vulnerable.
- Prevenir y atender los desastres de orden.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

El Plan de Desarrollo 2024-2027, “Atlántico para el Mundo”, adoptado mediante Ordenanza No. 615 del 14 de mayo de 2024, publicado en Gaceta Departamental No. 019 del 14 de mayo de 2024, provee a la administración del Departamento de los elementos indispensables para la construcción de una agenda en la que se contempla la unión de fuerzas y propósitos comunes por parte de los diferentes sectores de nuestra sociedad, de manera que se propicie el desarrollo integral del Atlántico, de lugar al cierre de brechas entre sus diferentes subregiones, se profundice en la sostenibilidad social, ambiental y productiva, y se logre la disminución de las desigualdades.

Estos actos se enmarcan en el fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental (Buen gobierno y Transparencia), como elemento fundamental para garantizar que los factores mencionados tengan los efectos esperados; así, se construirá un ordenamiento del territorio acorde con la seguridad y la convivencia, la inclusión social, la participación, la atención al medio ambiente y, dentro de este, la variable asociada con el cambio climático.

Que dentro de la visión del Plan de Desarrollo “Atlántico para el Mundo ” , En su artículo quinto visiona al Departamento en el 2035 como un territorio inteligente, competitivo y sostenible, gracias a la innovación como motor de desarrollo, convertido en un territorio inteligente e interconectado, que brinda a su población una alta calidad de vida, garantizando la atracción, formación y retención de la clase creativa e inversiones inteligentes; un Departamento líder en el contexto regional y nacional proyectado al nivel internacional, con un notable rango de desarrollo social, de su recurso humano, de su nivel socioeconómico y de sus capacidades para impulsar emprendimientos, destacado en el campo institucional y de la gestión pública, sobresaliente en lo cultural y con alto interés por la atención de los problemas asociados con la construcción de un entorno de paz y de convivencia social, del medio ambiente, y un aportante significativo a la

solución derivada del cambio climático.

Así mismo dispone en su artículo ocho, la "sostenibilidad" como principio de gobierno, entendida esta como la SOSTENIBILIDAD para la vida en todas sus manifestaciones, incluido el bienestar productivo, el bienestar social, la seguridad, la convivencia y paz, y el medio natural como obligación moral a preservar para las generaciones futuras.

JUSTIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN

El término minoría se refiere a un grupo de personas que, debido a calidades específicas como, su nacionalidad, etnia, religión, cultura o lengua, se distingue de otros grupos poblacionales de un país, o es marginado en razón de ello. Generalmente la minoría es dominada por una mayoría y a menudo debe luchar para mantener o desarrollar su identidad. En relación a la protección de los derechos humanos, las Naciones Unidas se refiere generalmente a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, con arreglo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías. Todos losEstados tienen en sus territorios nacionales uno o varios grupos minoritarios caracterizados por su propia identidad nacional, étnica, lingüística o religiosa, que difiere de la identidad de la población mayoritaria.

Se entiende que las minorías disfrutan por igual de todos los derechos humanos. Los elementos centrales de la ONU sobre los derechos de las minorías implican, la protección de la existencia como minorías; la no discriminación; el disfrute de su propia cultura, religión e idioma; la participación efectiva en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública; en la toma de decisiones; el mantenimiento de sus propias asociaciones; y mantenimiento de contactos y relaciones a través de las fronteras.

Todos los países del mundo albergan a miembros de minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas que enriquecen la diversidad de sus sociedades. Las minorías son frecuentemente víctimas de conflictos armado y de luchas internas en todo elmundo, por lo cual, Es motivo de especial preocupación la situación de los refugiados y de las personas pertenecientes a población de mujeres y los niños desplazados en nuestro país.

Cada uno de estos grupos enfrenta desafíos únicos:

- Migrantes: Pueden enfrentar barreras como el acceso a la educación, servicios de Salud, discriminación, Xenofobia, explotación laboral y/o falta de empleo y exclusión social.
- Personas en condición de discapacidad: barreras en el acceso a la vida laboral, movilidad, independencia, Dificultad para aprender a realizar tareas y actividades de la vida diaria, Costos elevados de adaptaciones y tecnologías de asistencia.
- Asuntos religiosos: Grupos religiosos minoritarios a menudo enfrentan discriminación ofalta de reconocimiento de su derecho a la libertad de culto. Vulneración del derecho a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.
- Veteranos: Muchos veteranos enfrentan dificultades en su reinserción exitosa a la vida civil, bienestar físico y psicosocial, adaptación al entorno laboral y salud mental.
- Activistas animalistas: Este grupo busca promover la ética del cuidado animal y proteger los derechos de los animales, pero suelen carecer de apoyo institucional y financiamiento.
- LGTBIQ+: Discriminación generalizada, exclusión, falta de acceso al campo laboral por razón de su identidad sexual, amenazas y/o hostigamiento, acoso, entre otras conductas vulneradoras de su integridad física y psicológica.
- Defensores de Derechos Humanos: riesgos relacionados con la vida y a amenazas a su integridad física.

De la Alerta temprana <u>029 de 2022</u>:

Las amenazas a líderes y a la comunidad en general son otra evidencia de la presencia de grupos armados ilegales, y a la vez expresión de la manera en la que estos pretenden obtener el control social de los territorios, de tal manera, los líderes comunales y organizaciones sociales que han hecho denuncias frente a la inseguridad o frente a la corrupción o sobre lugares de expendio de drogas o de personas asociadas con el microtráfico o el narco menudeo, han sido amenazados en estos municipios. Líderes comunales y sociales de Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Luruaco y Repelón han sido objeto de llamadas, panfletos y amenazas directas.

En razón a las características demográficas la gran mayoría de la población de la zona centro de Atlántico, incluidos los grupos étnicos, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad y de desprotección, lo cual potencia su nivel de riesgo. A lo anterior se suman, las constantes violaciones a los DDHH materializadas particularmente en amenazas y extorsiones y de las cuales son especiales víctimas los comerciantes formales e informales, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, miembros o líderes de organizaciones comunitarias, miembros o líderes de organizaciones de víctimas, representantes de población desplazada, sindicalistas, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, miembros o líderes de organizaciones sociales, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, población socialmente estigmatizada (personas en ejercicio de la prostitución, consumidores de drogas ilícitas, delincuentes comunes, miembros de partidos políticos , tales como Comunes y Colombia Humana, firmantes de paz entre el gobierno y las extintas guerrillas de las FARC, personas en proceso de reincorporación, entre otros.

Barranquilla (Atlántico), 29 de octubre de 2024 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre la situación de riesgo que enfrentan las lideres y los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en los 23 municipios del departamento del Atlántico, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) presentó un análisis detallado sobre los escenarios de riesgo advertidos en las alertas tempranas **029 de 2022** y **022 de 2023**, las cuales aún se encuentran vigentes.

Un proyecto enfocado en estos grupos justifica su necesidad al abordar estos problemas específicos, mejorando su calidad de vida, inclusión social y bienestar.

Adelantar este proceso de apoyo requiere un enfoque integral que resalte el impacto positivo en términos de justicia social, desarrollo económico, inclusión y cohesión social**,** es un esfuerzo alineado con las normativas y políticas internacionales, y tiene el potencial de generar impactos positivos tanto a nivel local como en la sociedad en general, beneficiando tanto a los grupos involucrados como a la comunidad en su conjunto:

1. Cumplimiento de Obligaciones Legales y Políticas Públicas: Colombia tiene marcos legales que promueven la inclusión social, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos. Un proyecto que apoya a estos grupos puede estar alineado con políticas públicas nacionales e internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en áreas como la reducción de desigualdades (ODS 10), trabajo decente (ODS 8) y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

2. Impacto en la Cohesión Social: Un proyecto que incluya a estos grupos fortalece la cohesión social al reducir la polarización y los conflictos derivados de la exclusión o la discriminación. Al integrar activamente a migrantes, veteranos y minorías religiosas en la comunidad, se promueve la convivencia pacífica y se fomenta el respeto por la diversidad. Esto contribuye a crear comunidades más estables y cohesionadas, lo cual es clave para la paz social y el desarrollo.

3. Diversificación de la Economía Local: Apoyar a estos grupos puede tener beneficios económicos directos. Por ejemplo, al integrar a los migrantes en programas de formación y empleo, se contribuye a aumentar la productividad local. Los veteranos traen consigo habilidades únicas que pueden ser aprovechadas en diferentes sectores, como el liderazgo y la gestión de crisis. El proyecto también puede generar nuevas oportunidades económicas para las personas involucradas en la protección animal, promoviendo emprendimientos en bienestar

animal o ecoturismo responsable.

4. Promoción de los Derechos Humanos: Un proyecto para apoyar a estos grupos justifica su necesidad en términos de la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la no discriminación, la libertad de culto, la dignidad en el empleo y el bienestaranimal. Al fortalecer estos derechos, las entidades territoriales cumplen con su deber de proteger a todas las personas, garantizando que ningún grupo sea dejado atrás o invisibilizado.

5. Reinserción y Reintegración Social: En el caso específico de los veteranos, este tipo de proyectos puede estar justificado en la necesidad de facilitar su reintegración a la vida civil. Programas de empleo, apoyo psicológico y social les permiten reincorporarse de manera efectiva a la sociedad. Además, esto contribuye a reducir los riesgos de exclusión o marginalización de aquellos que han servido al país.

6. Fortalecimiento de la Diversidad Cultural y Ambiental: Un proyecto que apoya a migrantes y grupos religiosos promueve la diversidad cultural, lo cual es clave para enriquecer la vida comunitaria, fortaleciendo valores de respeto y pluralismo. Los proyectos que incluyen a activistasanimalistas pueden tener un impacto ambiental positivo, promoviendo la conciencia sobre el bienestar animal y la sostenibilidad, y fomentando prácticas de conservación ambiental que benefician a toda la sociedad.

7. Visibilidad y Empoderamiento de Grupos Vulnerables: Un proyecto para estos grupos justifica su existencia al visibilizar a sectores de la población que, en muchas ocasiones, son ignorados o subrepresentados. Al darles una plataforma, se les otorga poder y capacidad para participar activamente en la toma de decisiones que les afectan, contribuyendo a una democracia más inclusiva y participativa.

8. Prevención de Conflictos Sociales: Apoyar a estos grupos puede prevenir conflictos y tensiones sociales. La falta de integración y de reconocimiento de las necesidades de las minorías puede generar conflictos, tanto dentro de la comunidad como entre el gobierno y los grupos afectados. Un proyecto que aborde sus preocupaciones ayuda a prevenir la exclusión y, en última instancia,a reducir las tensiones sociales y políticas.

9. Generación de Buenas Prácticas: Un proyecto de este tipo también puede justificar su implementación como un modelo de buenas prácticas que pueda ser replicado en otras regioneso por otras instituciones. Al demostrar el éxito de programas inclusivos y sostenibles, el proyecto puede sentar las bases para nuevas políticas y generar impactos a nivel regional o nacional;

Adelantar este proceso para apoyar a los grupos minoritarios contribuye a mejorar la equidad y justicia social, la gobernabilidad y el desarrollo sostenible para así ejercer garantía y defensa de sus derechos en el territorio atlanticense.

La Gobernación del Atlántico, especialmente la Secretaría del Interior, no cuenta con personal necesario para el desarrollo del proyecto, razón por la cual la Administración ha determinado como instrumento idóneo para satisfacer la necesidad expuesta, la celebración de un convenio de asociación con una entidad sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, TÉCNICOS, OPERATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALES Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GARANTÍA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

La Secretaría del Interior del Departamento del Atlántico considera viable la suscripción convenio de asociación con una entidad sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en el marco del artículo 355 de la constitución política de Colombia y el decreto 092 de 2017, para la ejecución de actividades en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo vigente, 2024-2027 del Departamento del Atlántico “Atlántico para el mundo”, así:

EJE PROGRAMATICO	1. Atlántico con sostenibilidad social
TEMA	1.7 Prevención de la delincuencia y acciones para la paz total
SECTOR	45. Gobierno territorial
COD PROGRAMA	4101
NOMBRE DE PROGRAMA	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos
COD DEL PRODUCTO	4502038
PRODUCTO	Servicio de promoción de la garantía de derechos
CODIGO INDICADORDE PRODUCTO	450203800
INDICADOR DE PRODUCTO	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas
INDICADOR DE PRODUCTO PERSONALIZADO	Estrategias de promoción de la garantía de derechos a personas en condición de discapacidad implementadas
META DE PRODUCTO REDACTADA	Implementar 1 (una) estrategia para la promoción de la garantía de derechos a las personas en condición de discapacidad mediante el comité de discapacidad.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

2.1 Identificación del Convenio:

La Clasificación de los Bienes y Servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes:

80101604	PLANIFICACION O ADMINISTRACION DE PROYECTOS

	Convenio de Asociación (artículo 355 Constitución política, artículo 5, Decreto 92 de 2017; artículo 96 inciso segundo de la Ley 489 de 1998).
2.2 Objeto	**AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, TÉCNICOS, OPERATIVOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALES Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GARANTÍA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**
2.3 Condiciones Técnicas Exigidas:	El Convenio se propone ejecutar hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del año 2025, dividido en las siguientes fases: **2.3.1. SOCIALIZACIÓN:** Se realizará una (1) socialización, con la participación de representantes de los grupos sociales para definir el alcance de las acciones a realizar por cada uno de este conjunto de ciudadanos con necesidades particulares. **2.3.2. JORNADAS DE VISIBILIZACIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS** A partir de los resultados de la socialización, se desarrollará una alternativa de solución detallada por cada uno de los siete (7) grupos sociales para los cuales se desarrollarán doce (12) jornadas de visibilización y garantía de derechos, para un total de ochenta y cuatro (84) jornadas de visibilización y garantía de derechos, que se desarrollarán en las cinco (5) subregiones del departamento del Atlántico de la siguiente manera: - Subregión Área metropolitana: Veinte (20) jornadas de visibilización y garantía de derechos, teniendo en cuenta es en la subregión dónde se encuentran mayormente concentrados los grupos sociales objetivo. META POBLACIONAL: Dos mil (2.000) atlanticenses, cien (100) por cada una de las veinte (20) jornadas. - Subregión Costera: dieciséis (16) jornadas de visibilización y garantía de derechos. META POBLACIONAL: 1.120 atlanticenses, setenta (70) por cada jornada. - Subregión Centro: dieciséis (16) jornadas de visibilización y garantía de derechos. META POBLACIONAL: 1.120 atlanticenses, setenta (70) por cada jornada. - Subregión Oriental: dieciséis (16) jornadas de visibilización y garantía de derechos. META POBLACIONAL: 1.120 atlanticenses, setenta (70) por cada jornada. - Subregión Sur: dieciséis (16) jornadas de visibilización y garantía de derechos. METAPOBLACIONAL: 1.120 atlanticenses, setenta (70) por cada jornada. Estas jornadas consistirán en la oferta de servicios dirigida a cada uno de los siete (7) grupos sociales, los cuales como relacionamos anteriormente son: • Migrantes • Personas en condición de discapacidad • Asuntos religiosos • Veteranos • Animalistas • Derechos Humanos • LGTBIQ+

Cada jornada de visibilización y garantía de derechos consistirá en lo siguiente:

Identificación de riesgos:
Teniendo en cuenta que los grupos sociales objetivo en su totalidad poseen riesgos relacionados a la vulneración y reconocimiento de sus derechos, con la realización de cada jornada se propondrán canales de atención que permitan recopilar sus necesidades y el tipo de riesgos a los que se exponen.
En ese sentido, a partir de los canales de atención que brindaremos con las jornadas, se propenderá por articular sus necesidades con la oferta institucional de la Gobernación del Atlántico, además de la Secretaría de Interior y Gobierno.

Sensibilización y empoderamiento en derechos:
Adicionalmente a la identificación de riesgos, se realizarán actividades de integración comunitaria dirigidas a la sensibilización y empoderamiento en derechos, utilizando la lúdica y la recreación como elementos dinamizadores.
De esta manera, cada jornada contendrá estaciones interactivas lúdicas dirigidas para niños, niñas, adolescentes y adultos, que permitan la generación de convivencia e integración comunitaria de los grupos sociales objetivo.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

Se realizarán veintiocho (28) sesiones de acompañamiento psicosocial, cuatro (4) sesiones para cada uno de los siete (7) grupos sociales, cada sesión dirigida a mínimo cincuenta (50) miembros de cada grupo social, para una META POBLACIONAL de mil doscientos (1.400) atlanticenses. Las sesiones serán encaminadas a la identificación de vulneración de derechos, sensibilización en primeros auxilios psicológicos y herramientas para la resiliencia

Como identificación de vulneración de derechos, encontramos la necesidad que los grupos sociales objetivo se reconozcan como sujetos de derechos y deberes, reconociendo sí han sido vulnerados sus derechos y de esa manera, determinar posibles patrones de conducta en sus entornos comunitarios. La sensibilización de primeros auxilios psicológicos y herramientas para la resiliencia surgen así, como una alternativa práctica para que posean un kit de herramientas psicosociales a la hora de enfrentar situaciones de riesgo. De esta manera, buscamos identificar factores de vulneración de derechos para conocer en profundidad los entornos comunitarios de los grupos sociales, estableciendo posibles hojas de ruta que permitan la armonización y convivencia ciudadana, en miras, de fortalecer su resiliencia.

TABLA RESUMEN ACTIVIDADES Y PRODUCTOS:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRODUCTO
Socialización	Se realizará una (1) socialización, con la participación de representantes de los grupos sociales para definir el alcance de las acciones a realizar por cada uno de este conjunto de ciudadanos con necesidades particulares.	Una (1) socialización dirigida a veinte (20) representantes por cada uno de los siete (7) grupos sociales, para un total de ciento cuarenta (140) representantes.	1 Acta de realización de la socialización, listado de asistencia y registro fotográfico.

Jornadas de visibilización y garantía de derechos	Se desarrollarán doce (12) jornadas de visibilización y garantía de derechos, para un total de ochenta y cuatro (84) jornadas de visibilización y garantía de derechos, que se desarrollarán en las cinco (5) subregiones del departamento del Atlántico.	Subregión Área metropolitana: Veinte (20) jornadas de visibilización y garantía de derechos, teniendo en cuenta es en la subregión dónde se encuentran mayormente concentrados los grupos sociales objetivo. META POBLACIONAL: Dos mil (2.000) atlanticenses, cien (100) por cada una de las veinte (20) jornadas. Subregión Costera: dieciséis (16) jornadas de visibilización y garantía de derechos. META POBLACIONAL: 1.120 atlanticenses, setenta (70) por cada jornada. Subregión Centro: dieciséis (16) jornadas de visibilización y garantía de derechos. META POBLACIONAL: 1.120 atlanticenses, setenta (70) por cada jornada. Subregión Oriental: dieciséis (16) jornadas de visibilización y garantía de derechos. META POBLACIONAL: 1.120, setenta (70) porcada jornada.. Subregión Sur: dieciséis (16) jornadas de visibilización y garantía de derechos. META POBLACIONAL: 1.120, setenta (70) por cada jornada.	Ochenta y cuatro (84) actas de realización de actividad, listados de asistencia y registro fotográfico.
Acompañamiento psicosocial	Se realizarán veintiocho (28) sesiones de acompañamiento psicosocial, cuatro (4) sesiones para cada uno de los siete (7) grupos sociales,encaminadas a la identificación de vulneraciónde derechos, sensibilizaciónen primeros auxilios psicológicos y herramientaspara la resiliencia.	Cuatro (4) sesiones para cada uno de los siete (7) grupos sociales, cada sesión dirigida a mínimo cincuenta (50) miembros de cada grupo social,para una META POBLACIONAL de mil cuatrocientos (1.400) atlanticenses.	28 actas de realización actividad, listados de asistencia y registro fotográfico.

Todas las actividades relacionadas deberán incluir *recurso humano, elementos técnicos y tecnológicos, refrigerios y transportes requeridos para garantizar la participación de la población objetivo.*

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Líder del Proyecto	Un (1) profesional en humanidades, ciencias sociales y/o ciencias humanas Con mínimo cuatro (04) años de experiencia en actividades en relación con el proyecto.
Coordinador operativo	Un (1) Profesional en administración de empresas, humanidades y/o en ciencias sociales, con experiencia relacionada de cuatro (4) años mínimo.

El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con el

	Departamento. No obstante, este se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con el contratante,la comunidad, o cause algún impacto negativo a el Departamento. El Departamento podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditar la experiencia del personal propuesto siempre y cuando con las mismas no se mejore la oferta en sus aspectos ponderables. Dichas aclaraciones se deberán efectuar en el periodo que para tal efecto se conceda al proponente, so pena de rechazo de la propuesta. Se deja constancia de la independencia de cada uno de los cargos solicitados en este numeral, por lo cual no se podrá presentar el nombre de una persona para más de un cargo. Si el contratista es el mismo que certifica la experiencia del profesional propuesto, además de esta certificación, se deberá acreditar también la contratación realizada, y las actividades o trabajos que se realizaron certificados. Las certificaciones se considerarán expedidas bajo gravedad de juramento.
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCIÓN	
3.1 Fundamentos Jurídicos:	La Constitución Política de la República de Colombia, establece: Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. La Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", determina: Artículo 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas *con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley.* *Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinara con precisión su objeto, terminó, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.* *Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, estas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común.* *En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que de origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos:* a. *Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas participantes; b. Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de*

	pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas; c. La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad; d. La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuáles deben participar representantes de las entidades públicas y de los particulares; e. La duración de la asociación y las causales de disolución. El Decreto 92 de 2017 "Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política", consigna: ARTÍCULO 5o. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional. Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los criterios para tal selección. Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace referencia el artículo 2 y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente decreto. En concordancia con lo dispuesto en la GUÍA PARA LA CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD emitida por la Agencia Colombia Compra Eficiente, la entidad interesada deberá comprometer recursos propios e independientes del aporte estatal para la ejecución de las actividades conjuntas en una proporción del treinta por ciento (30%) del valor total del proyecto en dinero, con el fin adicional de fortalecer las acciones realizadas, optimizar los recursos y generar un mayor impacto hacia la comunidad, garantizando la capacidad financiera, jurídica, técnica y organizacional.
4. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	
4.1 Buen manejo de recursos:	**4.1.1 Eficacia**: La Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) ofrece para la ejecución del Convenio de Asociación, la máxima racionalidad de la relación costo beneficios, teniendo en cuenta que aporta el treintapor ciento (30%) del valor total del Convenio, maximizando así el rendimiento de los resultados con costos menores, alcanzando el mayor grado de satisfacción de las necesidades de la población beneficiaria. **4.1.2 Eficiencia**: La Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de acuerdo con su conocimiento y experticia, conoce y domina metodologías y procedimientos que resultan ser los más adecuados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos y la consecución de los fines del Convenio de Asociación, considerando quetienen experiencia en las actividades a desarrollar. **4.1.3 Economía:** La Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) puede ejecutar el Convenio de Asociación sin incurrir en procedimientos o trámites distintos o adicionales de los estrictamente necesarios, cumpliéndolo con austeridad de tiempo, medios y gastos el objeto contractual, con base en lo establecido en la propuestapresentada. **4.1.4 Gestión del Riesgo:** La Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de conformidad con su experticia y experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades, reduce considerablemente la posibilidad en la ocurrencia de circunstancias que impidan o dificulten el debido desarrollo de los objetivos contractuales y los fines incorporados en el Plan Departamental de Desarrollo.

5. IDONEIDAD DE LA ENTIDAD	
5.1 Requisitos de Experiencia e Idoneidad:	**5.1.1 Objeto Social:** Se requiere contar con una Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) cuyo Objeto Social registrado en su Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio) esté dirigido a desarrollar actividades relacionadas con el objeto del presente Convenio de Asociación. **5.1.2 Estructura Organizacional Mínima:** La entidad deberá acreditar que tiene una estructura organizacional sólida, con órganos de administración activos, que cuenta con estados financieros debidamente certificados y dictaminados, que se encuentra al día en el registro ante la Cámara de Comercio o ante las entidades que tienen a cargo su vigilancia y control. Por lo anterior la entidad deberá anexar el certificado de existencia y representación legal vigente, así como copia de los estatutos de la entidad. **5.1.3 Equipo Mínimo Requerido:** La ESAL debe poseer una estructura organizacional sólida, con órganos de administración activos y que garantice durante la ejecución del Convenio de Asociación que cuenta con el equipo misional, técnico y administrativo necesario para cumplir con el objeto del proyecto. **5.1.4 Experiencia:** La Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) debe acreditar experiencia en la ejecución de proyectos, convenios o contratos cuyo objeto o actividades u obligaciones, se encuentren relacionadas con el objeto del presente Convenio de Asociación. Por lo tanto, para acreditar la experiencia el oferente deberá relacionar mínimo tres (3) contratos o convenios terminados, cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto del aporte del Departamento. **5.1.5 Reputación:** La Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) deberá acreditar su labor en pro de actividades relacionadas con el objeto del presente Convenio de Asociación de acuerdo con lo consignado en su propuesta; adicionalmente deberá anexar Certificados de los Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y Medidas Correctivas tanto del Representante Legal como de la Persona Jurídica, en donde se evidencie que no han tenido alguna anotación o sanción registrada. Igualmente, que desde su propuesta manifiestan bajo la gravedad de juramento, que no se encuentran incursos en ninguna inhabilidad e incompatibilidad de los que trata el Decreto 92 de 2017 y aportar el Certificado de no estar en la categoría de personas políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 2016.
6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES APLICABLES AL CONVENIO	
6.1 Valor estimado del convenio:	El Convenio de Asociación se suscribirá por un valor total de **NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($975.098.914) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR** discriminado de la siguiente manera: La suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE** (**$682.569.240)**, es decir el setenta por ciento (70%) del valor total del convenio, corresponden al aporte del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO La suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE** (**$292.529.674)** equivalente al treinta por ciento (30%), corresponden al aporte del Asociado, para lo cual debe Aportar certificación bancaria de la ESAL y/o cupo crédito aprobado por una entidad del sector financiero (incluyendo empresas de factoring), donde conste la liquidez financiera por el monto requerido de mínimo el 30% del valor del presente proyecto.
6.2 Forma de	**6.2.1 Por el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO:**

desembolso:

6.2.1.1 Un primer desembolso equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del aporte del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO por concepto de pago anticipado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, presentación de cuenta de cobro o factura, certificación de encontrarse al día con los pagos al sistema general de seguridad social y parafiscales y presentación y aprobación del plan de inversión

6.2.1.2 Un segundo desembolso correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del aporte del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, al segundo mes de ejecución del Convenio, previa presentación del Informe Parcial debidamente soportado, junto con el certificado de recibido a satisfacción de ejecución de actividades expedido por la Supervisión, y certificación de encontrarse a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

6.2.1.3 Un tercer desembolso correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del aporte del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, al cuarto mes de ejecución del Convenio, previa presentación del Informe Parcial debidamente soportado, junto con el certificado de recibido a satisfacción de ejecución de actividades expedido por la Supervisión, y certificación de encontrarse a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

6.2.1.4 Un cuarto desembolso correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del aporte del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, al sexto mes de ejecución del Convenio, previa presentación Informe Parcial debidamente soportado, junto con el certificado de recibido a satisfacción de ejecución de actividades expedido por la Supervisión, y certificación de encontrarse a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

6.2.1.5 Un quinto desembolso correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del aporte del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, previa presentación del Informe Final debidamente soportado, certificado de recibido a satisfacción de ejecución de actividades expedido por la Supervisión y certificación de encontrarse a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

6.2.2 Por el ASOCIADO:

6.2.2.1 Los aportes correspondientes a la financiación de la Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) serán distribuidos en su totalidad a la fecha de legalización del Convenio de Asociación.

6.3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Rubro Presupuestal:

Número	Fecha	Valor	Rubro Presupuestal
202501083	**03/04/2025**	**$682.569.240**	**2.3.2.02.009-01**

6.4 Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del Convenio:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 92 de 2017, se elaboró un presupuesto oficial de acuerdo con los precios y condiciones del mercado, y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones para el 2025, de igual manera, se determinó el presupuesto oficial para este proceso competitivo, luego de un estudio serio y el análisis detallado de todas las actividades a ejecutar, por ello se garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades del mismo.

6.5 Criterios de Selección:	De conformidad con el artículo 5 del Decreto 92 de 2017 que señala: “Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los criterios para tal selección”; se establecen los siguientes criterios de selección asignando el siguiente puntaje: 6.5.1 Evaluación por ofrecimiento económico: Se otorgarán cuatrocientos (400) puntos al proponente que presente el mayor valor del aporte para llevar a cabo el proyecto. A las demás propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, de acuerdo con la siguiente fórmula: PP = Vmp / Vpe * 400 Donde: PP es el puntaje que obtiene la oferta en evaluación. Vmp es el valor de la propuesta más económica. Vpe es el valor de la propuesta en evaluación 6.5.2 Evaluación por no sanciones: Se asignarán cien (100) puntos en los casos en que se acredite que ni el proponente ni alguno(s) de sus integrantes haya sido sujeto de multas, penas pecuniarias, terminación unilateral, o sanción de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento contractual en los últimos tres (03) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. En los demás casos, esto es, en los que el proponente o cualquiera de sus integrantes haya sido sujeto de multas, penas pecuniarias, terminación unilateral o sanción de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento contractual en los últimos tres (03) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, se asignarán cero (0) puntos. Para acreditar este criterio, el Representante Legal del proponente deberá suscribir carta en la que manifieste que ni el proponente ni alguno(s) de sus integrantes ha sido sujeto de multas, penas pecuniarias, terminación unilateral, o sanción de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento contractual en los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. La entidad se reserva el derecho a verificar tal información.
6.6 Criterios de Desempate:	• Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. • Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. • Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. • Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en

la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

• Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

• Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

• Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales.

• Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

• Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año 2024, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MYPIMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

• Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

Utilizar como método aleatorio, el sorteo por sistema de balotas. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de esta. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate en casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos.

Nota: En cumplimiento de lo previsto en la Ley 2069 de 2020, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

7. ASPECTOS GENERALES APLICABLES AL CONVENIO	
7.1 Duración del Convenio:	El plazo del Convenio de Asociación hasta el **31 de diciembre de 2025** e iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
7.2 Lugar de Ejecución:	El proyecto se ejecutará en el del Departamento del Atlántico.
7.3 Obligaciones del Departamento:	1. Suministrar oportunamente la información que requiera el ASOCIADO para el cumplimiento de sus obligaciones asociadas a la suscripción del presente Convenio de Asociación. 2. Efectuar el aporte económico de conformidad con lo pactado en el Convenio de Asociación. 3. Designar al servidor público que tendrá a su cargo la realización de la supervisión pertinente conforme a la normatividad vigente.
7.4 Obligaciones Generales del Asociado:	1. Efectuar el aporte de conformidad con lo pactado en el Convenio de Asociación. 2. Elaborar el Cronograma y Plan de Trabajo para la ejecución de las actividades, de acuerdo con la Propuesta presentada. 3. Suministrar la logística necesaria para el desarrollo de la Propuesta presentada. 4. Destinar en forma oportuna, los recursos administrativos, técnicos y operativos requeridos en el desarrollo del Convenio de Asociación. 5. Contribuir con información y acompañamiento técnico, de acuerdo con sus normas y procedimientos para alcanzar los objetivos propuestos. 6. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 7. Teniendo en cuenta que el ASOCIADO goza de plena autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para adelantar los procesos de contratación, en aras de la ejecución de las actividades del Convenio de Asociación, deberá garantizar que se efectúen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y demás controles de calidad. 8. Encontrarse al día frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral y parafiscales al momento de la suscripción del Convenio de Asociación y deberá estar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su terminación. 9. Dar cumplimiento a las obligaciones por concepto de salarios, aportes a la seguridad social integral, prestaciones sociales y parafiscales del personal vinculado para la ejecución del Convenio de Asociación. 10. Mantener el personal que contrate para el desarrollo del objeto del Convenio de Asociación afiliado a la Seguridad Social integral y Riesgos Profesionales, y presentar las respectivas constancias a la Supervisión del convenio cuando sea requerido. 11. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia dando aplicación en lo que le corresponda. 12. Socializar las actividades con la Supervisión del Convenio de Asociación, así mismo, deberá reportar los avances y/o retrocesos para lo cual deberá aportar las respectivas evidencias según el formato que le sea previamente suministrado por el DEPARTAMENTO. 13. El ASOCIADO para la suscripción del Convenio de Asociación manifestará bajo la gravedad de juramento, que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC), ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; y b). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. 14. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del DEPARTAMENTO a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades del Convenio de Asociación, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes; y las piezas producidas, así como cualquier información que se entregue a la prensa hablada, escrita y/o a un tercero, deberá contar con la autorización previa del DEPARTAMENTO.

	15. La información y datos utilizados para el desarrollo del Convenio de Asociación es de carácter confidencial. La información confidencial deberá ser guardada por el ASOCIADO y utilizarse exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado. 16. El ASOCIADO manifiesta no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Así mismo se compromete a verificar que el personal del que disponga para la ejecución del objeto del Convenio de Asociación, no presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
7.5 Obligaciones Específicas del Asociado:	1. Realizar un total ciento trece (113) jornadas distribuidas entre socialización, jornadas de visibilización, garantía de derechos; y acompañamiento psicosocial dirigidas a los grupos sociales focalizados que incluyen: Recurso humano, elementos técnicos y tecnológicos, refrigerios y transportes requeridos para garantizar la participación de la población objetivo. 2. Coordinar la ejecución de las actividades propuestas, aportando el aspecto logístico, administrativo que sea necesario para el desarrollo de las mismas. 3. Cumplir con el equipo de trabajo de acuerdo con los perfiles presentados en la oferta para el cumplimiento de los objetivos. 4. Cumplir con las diferentes fases establecidas en la descripción del objeto. 5. Cumplir a cabalidad con la propuesta presentada y lo dispuesto en los estudios previos. 6. Entregar la Evidencias fotográficas y listados de asistencia, de cada una de las actividades desarrollada. 7. Presentar los informes que se soliciten en cumplimiento de su objeto contractual. 8. Cumplir con lo dispuesto en la propuesta. 9. Cumplir con todas las actividades detalladas en el numeral 3.3 Condiciones Técnicas Exigidas del Estudio Previo. 10.Las demás que se requieran por parte del supervisor y que sean acordes con el objeto del contrato.
7.6 Supervisión:	**NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** MANUEL ANTONIO DIAZ JIMENO **CARGO DEL FUNCIONARIO:** ASESOR DE DESPACHO CODIGO 105 GRADO 05 **Dependencia:** SECRETARIA DE INTERIOR
7.7 Documentos del Convenio aportados por el Proponente:	**7.7.1 Documentos en caso de competencia:** 7.7.1.1 La entidad proponente deberá estar inscrita en el SECOP II con la documentación que para el efecto dicha plataforma solicite; igualmente la contratación se adelantará a través de esta herramienta tecnológica. 7.7.1.2 Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad (Cámara de Comercio actualizada, con fecha de expedición no mayor a 30 días). 7.7.1.3 Copia de los Estatutos (en estos revisar si los periodos por los cuales se nombran o eligen el representante legal, el revisor fiscal y la junta directiva, están actualizados en Cámara de Comercio a través del registro de las actas correspondientes; de no ser así adjuntar las actas al expediente y realizar el respectivo tramite de registro de estas). 7.7.1.4 Autorización para suscribir contratos por parte del representante legal de la entidad proponente, cuando en sus estatutos así lo establezca y para destinar el treinta por ciento (30%) del valor del proyecto como aporte de cofinanciación a la ejecución de este; (este documento deberá ser un acta de reunión con las formalidades plenas). 7.7.1.5 Registro Único Tributario de la DIAN (RUT, con fecha de expedición no mayor a 30 días). 7.7.1.6 Aportar balance y estados financieros debidamente certificados y dictaminados con corte a vigencia de 2024 por el revisor fiscal. **7.7.2 Documentos en caso de no competencia:**

7.7.2.1 Aportar Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la ESAL donde conste la liquidez financiera por el monto requerido de mínimo el treinta por ciento (30%) del valor del presente Convenio de Asociación.
7.7.2.2 Aportar certificación bancaria de la ESAL y/o cupo crédito aprobado por una entidad del sector financiero (incluyendo empresas de factoring), donde conste la liquidez financiera por el monto requerido de mínimo el treinta por ciento (30%) del valor del presente Convenio de Asociación.
7.7.2.3 Aportar balance y estados financieros debidamente certificados y dictaminados con corte a vigencia de 2024 por el revisor fiscal.
7.7.2.4 Certificar que ninguno de los directivos, aportantes, fundadores, y las personas vinculadas familiar y comercialmente con ellos, estén en la categoría de personas políticamente expuestas de acuerdo con el Decreto 1674 de 2016.
7.7.2.5 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.
7.7.2.6 Formato Único de Hoja de Vida.
7.7.2.7 Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales firmada por el revisor fiscal que figura en cámara de comercio; de no tener revisor fiscal será firmada por el Representante Legal, esta certificación debe contemplar lo siguiente:
7.7.2.7.1 Si tienen personal bajo nómina y están obligados a pagar aporte, certificar que están al día y aportar la PILA.
7.7.2.7.2 Si no tienen personal bajo nómina, certificado donde expresen la no existencia de personal y la no obligación de realizar aportes por parte de la entidad, firmado por el Revisor Fiscal de la Entidad.
7.7.2.7.3 En ambos casos, hay que mencionar que se certifica por los últimos seis (6) meses y hacer mención que para el desarrollo de proyectos se vincula al personal necesario a través de prestaciones de servicio o la figura contractual empleada por la entidad proponente.
7.7.2.7.4 Del Revisor Fiscal anexar copia de la cédula, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.
7.7.2.8 Documentos que acrediten la idoneidad del contratista. La entidad sin ánimo de lucro interesada debe acreditar experiencia relacionada con el objeto del presente convenio. Para acreditar la experiencia el oferente deberá relacionar máximo tres (3) contratos o convenios terminados, cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto del aporte del Departamento.
7.7.2.9 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Representante Legal y Entidad).
7.7.2.19 Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República (Representante Legal y Entidad).
7.7.2.11 Certificado de Antecedentes Judiciales Policía Nacional (Representante Legal)
7.7.2.12 Certificado de Medidas Correctivas (Representante Legal)
7.7.2.13 Constancia del RUES.
7.7.2.14 Certificado de Registro Deudores Alimentarios Morosos-REDAM.
7.7.2.15 Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a un mes.
7.7.2.16 Acreditación de contar con el equipo misional, técnico y administrativo necesario para cumplir con el objeto del proyecto.

7.8 Garantías Exigidas

GARANTIA	MONTO Y VIGENCIA DEL AMPARO
CUMPLIMIENTO	Por un monto equivalente al 10% del valor total del convenio, con una vigencia igual al término de duración del mismo y seis meses más.
CALIDAD DEL SERVICIO	Por un monto equivalente al 10% del valor total del convenio, con una vigencia igual al término de duración del mismo y seis meses más.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Por un monto equivalente al 5% del valor del contrato y una vigencia igual al termino de duración pactado y tres años más.

		DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	Por un monto equivalente al 100% del valor entregado por este concepto, con una vigencia igual al pazo de ejecución del proyecto y cuatro meses más.
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	En cuantía de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV), y una vigencia igual al plazo del contrato.

FIRMAS Y APROBACIONES	
Firma de quien proyectó el estudio **(Dependencia Generadora de la Necesidad)**	**NOMBRE:** JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA
	CARGO: SECRETARIO DE INTERIOR
	FIRMA
Firma responsable (secretario de despacho)	**NOMBRE:** JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA
	CARGO: SECRETARIO DE INTERIOR
	FECHA: ABRIL DE 2025
	FIRMA